

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 11° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4548-2022
CARATULADO : SOHL ARQUITECTURA LTDA./TESORERÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto:

Que compareció don **Michael Stockins Peirano**, arquitecto, en representación de la sociedad **Sohl Arquitectura Limitada**, domiciliados en calle La Capitanía N°779, Las Condes, he interpuso demanda ordinaria en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de la **Tesorería General de La República**, representada por don **Hernán Nobizelli Reyes**, contador Auditor, ambos con domicilio en calle Teatinos 28, comuna de Santiago, con el objeto de que se declare en definitiva la prescripción extintiva de los derechos y acciones de la Tesorería General de la República para ejercer el cobro de los impuestos adeudados por su representada, más reajustes, intereses y multas según se detalla en certificado de deuda que acompaña, respecto del deudor la sociedad Sohl Arquitectura Limitada, con expresa condena en costas en caso de oposición.

Manifestó que su representada adeuda a la fecha de la demanda, incluidos reajustes, intereses y multas, la suma de \$ 157.520.388.- según se puede apreciar del detalle del certificado de deudas que acompaña.

Destacó que en el caso se trata de deudas que tienen más de 7 años de vencidas, por lo que de acuerdo a nuestra legislación vigente se encuentran irremediablemente prescritas, al no existir acto de interrupción alguna por parte del acreedor.

Precisó que en materia Tributaria, la prescripción está tratada en los artículo 200 y 201 del Código Tributario.

Indicó que de acuerdo a la normativa pertinente, en materia Tributaria existe la prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos y la prescripción de la acción del cobro de impuestos adeudados, cuyo titular es la Tesorería General de la República.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXWJXXXQGF

Hizo presente que en la especie, los vencimientos de los impuestos adeudados son de los años, 2006, 2010, 2011 y 2015, por lo que la evidencia del transcurso del plazo de prescripción es indubitada.

Fundó su demanda en lo dispuesto en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, 2492, 2514 y 2521 del Código Civil.

Por escrito de 3 de agosto de 2022, compareció don **Fernando Quintanilla Letelier**, abogado del **Servicio de Tesorerías**, en representación del **Fisco de Chile**, ambos domiciliados en Avenida Pedro de Valdivia N°229, comuna de Providencia, Santiago, quien contestó la demanda ordinaria de prescripción extintiva respecto de la acción de cobro de los tributos correspondiente a la deuda fiscal morosa de la sociedad demandante y solicitó el rechazo de ella en todas sus partes.

Manifestó que respecto de los formularios y folios que la actora pide la declaración de prescripción extintiva, han sido efectivamente demandados en tiempo y forma por parte del Fisco representado por el Servicio de Tesorerías, en los expedientes de cobro, a saber: Rol 645-2007, comuna de Las Condes; 2326-2010, comuna de Huechuraba; 10190-2012, comuna de Huechuraba; 10634-2012, comuna de Huechuraba; 13360-2015, comuna de Las Condes, y 11972-2016, comuna de Las Condes.

Destacó que en todos estos expedientes se accionó por impuestos fiscales adeudados, respecto de los cuales el contribuyente demandado ha sido notificado de la acción del Fisco en su domicilio tributario efectivo a la fecha de la notificación de las respectivas demandas de manera tal que, habiéndose notificado en tiempo y forma se ha interrumpido el plazo de prescripción extintiva que pudiese asistirle, por lo que no es efectivo lo que señala la demandante en su libelo en el sentido que el Fisco representado por Tesorería General de la República se ha mantenido inactivo.

Agregó que en dichos expedientes no solamente se ha notificado al deudor de las acciones de cobro del Fisco, sino que, además, se han trabado embargos sobre bienes de su propiedad los que se han intentado ejecutar judicialmente en tiempo y forma. Por ello, no es efectivo lo que señala el actor en su demanda en relación a que el Fisco de Chile se ha mantenido inactivo en el cobro de los tributos morosos.



Como fundamentos de Derecho indicó que el contribuyente en cuestión ha sido notificado de conformidad a lo previsto en artículo 171 del Título V del Código Tributario, dejándose al momento de la notificación en su domicilio copias integrales de las resoluciones notificadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 200 del Código Tributario junto con lo previsto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado.

Refirió que se debe tener presente que “corresponde al Servicio de Tesorerías el cobro de todo los tributos y créditos fiscales”, cuyo cobro se encomiende a este Servicio, el que se regirá por las normas ya aludidas del Título V, Libro III del Código Tributario, artículos 168 y siguientes y, en cuanto a las normas de prescripción aplicables, se debe estar a lo dispuesto en el artículo 201, inciso 1° del Código Tributario, del cual se concluye claramente que, en los mismos plazos señalados en el artículo 200 del mismo cuerpo legal y computados de la misma forma, desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago, prescribirá la acción del fisco; de esta manera, se acreditará que el plazo de prescripción se ha interrumpido de manera efectiva en tiempo y forma.

Planteó que consta en los expedientes de cobro que el demandante de autos y ejecutado por el Servicio de Tesorerías que éste no dedujo defensa alguna en contra de la acción de cobro de créditos morosos del Fisco y en razón de esto, el demandante de autos se encuentra inhabilitado de utilizar la prescripción extintiva en esta ocasión en calidad de acción ya que no hizo la correspondiente reserva de acciones establecida en la ley.

En criterio del Fisco, al ejecutado no le asiste este derecho, ya que el artículo 177 inciso 2° del Código Tributario, excluye la prescripción dentro de las excepciones que por la sola disposición de la ley se consideran siempre reservadas para el juicio ordinario al señalar en su inciso primero que las excepciones de las que dispone el ejecutado son el pago, la prescripción y no empecer el título al ejecutado, y en inciso siguiente señala *“Las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil se entenderán siempre reservadas al ejecutado para el juicio ordinario correspondiente, sin necesidad de petición ni declaración expresa”*.



Añadió que el artículo 181 del Código Tributario, de manera expresa señala que son aplicables para la tramitación y fallo de las excepciones opuestas por el ejecutado, los artículos 473 y 474 del Código de Procedimiento Civil, los que tratan precisamente de la reserva de las excepciones que hayan sido opuestas por el ejecutado en su contestación señalando:

Indicó que en el presente caso, aparece con claridad meridiana, que la acción ordinaria ejercida por la demandante en autos no es permitida por la ley, al no haberse solicitado la reserva de la excepción de prescripción contra la acción ejecutiva por parte de la ejecutada, ahora demandante, en la forma prevista en los artículos 473 y 474 del Código de Procedimiento Civil.

Concluyó señalando que la sanción establecida por el legislador para el caso en que se interponga demanda de prescripción en juicio ordinario sin la correspondiente reserva de excepciones es la descrita en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, el que señala que respecto del ejecutado al que se le autorizó la reserva de excepciones que no la interponga dentro del plazo dispuesto por el artículo 474 del mismo cuerpo legal, será la de *no ser admitida después*”.

Hizo presente la aplicación de las normas del Juicio Ejecutivo civil ya citadas por la remisión que a ellas hace el artículo 2° del Código Tributario, en concordancia con el inciso 2° del artículo 190 del Código Tributario, el cual señala que en lo que fuere compatible con el carácter administrativo del procedimiento dispuesto en el Título V, se aplicarán las normas contempladas en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil; de esta forma al ser expresamente por ley aplicables los artículos 473 y 474 del Código de Procedimiento Civil los que se encuentran incluidos precisamente en el Título I del Libro III de este cuerpo legal, en razón de lo anteriormente razonado resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 478 del mismo cuerpo legal el cual describe la sanción a lo dispuesto en los artículos 473 y 474 del citado cuerpo legal.

Hizo presente también que refrenda esta posición de improcedencia de la acción de prescripción en el citado caso, lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en fallo en causa rol 8944-2014, caratulada



“Clorinda Ardiles Rocco con Tesorería Regional de Antofagasta”, de fecha 16 de junio de 2014.

Mediante resolución de 28 de septiembre de 2022 se tuvo por evacuado trámite de réplica de la demandante.

Por resolución de 26 de octubre de 2022 se tuvo por evacuado el trámite de dúplica en rebeldía de la demandada.

En resolución de 29 de diciembre de 2022 se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

- Efectividad de haberse interrumpido la prescripción de los derechos y acciones de la Tesorería General de la República para ejercer el cobro de los impuestos a la demandante de autos. En la afirmativa, hechos y circunstancias que configuran dicha prescripción.

Mediante resolución de 25 de abril de 2023 se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando:

Primero: Que ha comparecido don **Michael Stockins Peirano**, en representación de la sociedad **Sohl Arquitectura Limitada**, he interpuso demanda ordinaria en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de la **Tesorería General de La República**, representada por don **Hernán Nobizelli Reyes**, con el objeto de que se declare en definitiva la prescripción extintiva de los derechos y acciones de la Tesorería General de la República para ejercer el cobro de los impuestos adeudados por su representada, más reajustes, intereses y multas según se detalla en certificado de deuda que acompaña, respecto del deudor la sociedad Sohl Arquitectura Limitada, con expresa condena en costas en caso de oposición.

Fundó la demanda sobre declaración de prescripción en los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de esta sentencia.

Segundo: Que la demandada solicitó el rechazo de la acción de prescripción, alegando básicamente la improcedencia de la acción deducida, conforme a las alegaciones de hecho y de derecho vertidas en la parte expositiva de esta sentencia.



Tercero: Que con la finalidad de poder determinar la procedencia de la prescripción extintiva reclamada, corresponde establecer, *ex ante*, la existencia de la obligación y sus estipulaciones. Asimismo, ha de determinarse la fecha en que la obligación se hizo exigible, con arreglo a lo dispuesto en artículo 1698 del Código Civil, correspondiendo a la demandada demostrar en autos, por su parte, la existencia de alguna acción para el cobro de dicha obligación tributaria y de haberla ejercido oportunamente, o cualquier otro hecho que haya suspendido o interrumpido la prescripción, como la celebración de un convenio de pago o la compensación administrativa de deudas.

Cuarto: Que para tal efecto, el actor acompañó como medio de prueba, la siguiente prueba instrumental, inobjetada de contrario:

- Certificado de deuda del Servicio de Tesorerías, el que da cuenta que Sohl Arquitectura Limitada, adeuda respecto de los Formularios 21 y 45, la suma de \$157.520.388.- cuyos folios, montos y fechas de vencimientos corresponden a los siguientes: 1) Folio 1125046, fecha de vencimiento: 12 de abril de 2010, por la suma de \$307.290.-; 2) Folio 1125049, fecha de vencimiento: 12 de mayo de 2010, por la suma de \$10.277.989.-; 3) Folio 112769625, fecha de vencimiento: 01 de enero de 1900, por la suma de \$22.590.-; 4) Folio 223789312, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2012, por la suma de \$55.014.735.-; 5) Folio 91637681, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2011, por la suma de \$19.125.727.-; 6) Folio 92623716, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2006, por la suma de \$3.759.848.-; 7) Folio 94904650, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2010, por la suma de \$11.082.473.-; 8) Folio 223789312, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2012, por la suma de \$5.037.773.-; 9) Folio 236584095, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2015, por la suma de \$52.892.225.-

Quinto: Que la demandada, por su parte, no rindió prueba alguna en la causa que dé cuenta de la existencia de algún hecho de carácter interruptivo del término de la prescripción.

Sexto: Que con el mérito de la prueba rendida por la actora, ha quedado suficientemente acreditado en estos autos:

i. La existencia de la deuda morosa por impuestos adeudados por parte del actor, según Formularios 21 y 29, de acuerdo a los folios, fechas



de vencimiento y montos que da cuenta el considerando cuarto de esta sentencia.

ii. Que el demandante no pagó los impuestos cobrados por la Tesorería General de La República que dicen relación con los Formularios 21 y 29, ya referidos.

Séptimo: Que por la especificidad de la materia y la obligación tributaria cuya prescripción extintiva se pretende, la regla general contenida en el artículo 2515 del Código Civil, cede en relación con las disposiciones contenidas en los artículos 200 y 201 del Código Impositivo.

Octavo: Que en este contexto, el artículo 200 del Código Tributario, establece que: *“El Servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago.*

El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiese presentado o presentada fuere maliciosamente falsa. Para estos efectos, constituyen impuestos sujetos a declaración aquellos que deban ser pagados previa declaración del contribuyente o del responsable del impuesto.

En los plazos señalados en los incisos anteriores y computados en la misma forma prescribirá la acción del Servicio para perseguir las sanciones pecuniarias que accedan a los impuestos adeudados.

Los plazos anteriores se entenderán aumentados por el término de tres meses desde que se cite al contribuyente, de conformidad al artículo 63 o a otras disposiciones que establezcan el trámite de la citación para determinar o reliquidar un impuesto, respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente derivados de la operaciones que se indiquen determinadamente en la citación. Si se prorroga el plazo conferido al contribuyente en la citación respectiva, se entenderán igualmente aumentados, en los mismos términos, los plazos señalados en este artículo si se requiere al contribuyente en los términos del inciso tercero del artículo 63, los plazos señalados se aumentarán en un mes.



Las acciones para perseguir las sanciones de carácter pecuniario y otras que no accedan al pago de un impuesto prescribirán en tres años contados desde la fecha en que se cometió la infracción”.

A su vez, el artículo 201 del cuerpo legal en comento, establece que: *“En los mismos plazos señalados en el artículo 200, y computados en la misma forma, prescribirá la acción del Fisco para perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos.*

Estos plazos de prescripción se interrumpirán:

1°.- Desde que intervenga reconocimiento u obligación escrita.

2°.- Desde que intervenga notificación administrativa de un giro o liquidación.

3°.- Desde que intervenga requerimiento judicial.

En el caso del N° 1, a la prescripción del presente artículo sucederá la de largo tiempo del artículo 2515 del Código Civil. En el caso del N° 2, empezará a correr un nuevo término que será de tres años, el cual sólo se interrumpirá por el reconocimiento u obligación escrita o por requerimiento judicial.

Decretada la suspensión del cobro judicial a que se refiere el artículo 147, no procederá el abandono de la instancia en el juicio ejecutivo correspondiente mientras subsista aquélla.

Los plazos establecidos en el presente artículo y en el que antecede se suspenderán durante el período en que el Servicio esté impedido, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 24, de girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria”.

Noveno: Que en la especie, se ha acreditado la existencia de la obligación tributaria adeudada mediante el respectivo certificado de deuda, punto de partida para ejercer la acción de prescripción extintiva que se ha ejercido.

Por su parte, si bien la demandada alegó la existencia de eventuales expedientes administrativos de cobro de las obligaciones cuya prescripción se pretende, dado el incumplimiento de su carga probatoria, en orden a acompañar dichas causas al presente proceso, es que el hecho impositivo se ha de tener por no probado y en consecuencia, el término de



prescripción ha de computarse con arreglo a los artículos 200 y 201 ya señalados, a partir de la fecha de vencimiento legal de los tributos alegados.

En consecuencia, las deudas contenidas en: 1) Folio 1125046, fecha de vencimiento: 12 de abril de 2010, por la suma de \$307.290.-; 2) Folio 1125049, fecha de vencimiento: 12 de mayo de 2010, por la suma de \$10.277.989.-; 3) Folio 112769625, fecha de vencimiento: 01 de enero de 1900, por la suma de \$22.590.-; 4) Folio 223789312, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2012, por la suma de \$55.014.735.-; 5) Folio 91637681, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2011, por la suma de \$19.125.727.-; 6) Folio 92623716, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2006, por la suma de \$3.759.848.-; 7) Folio 94904650, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2010, por la suma de \$11.082.473.-; 8) Folio 223789312, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2012, por la suma de \$5.037.773.-; 9) Folio 236584095, fecha de vencimiento: 30 de abril de 2015, por la suma de \$52.892.225, se encuentran irremediabilmente prescritas, por haber transcurrido con creces, los términos establecidos en la normativa tributaria para declarar la extinción de dichos tributos.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, haciéndonos cargo de la alegación formulada por la demandada, en orden a que este Tribunal no podría conocer de la presente acción, por no haberse formulado por parte de la actora una reserva de acciones en los términos de los artículos 473 y 474 del Código de Procedimiento Civil, también la misma debe ser desestimada, toda vez que, dicha defensa contradice la garantía fundamental del derecho a la acción y a la tutela judicial efectiva.

En efecto, para la procedencia de la reserva de derechos del ejecutado, es necesario que el ejecutado, en el contexto de un juicio ejecutivo, **haya deducido oposiciones dentro del término legal**. En este escenario, la demandada no sólo no probó que existieran los expedientes administrativos, sino que tampoco probó que la demandante de autos haya opuesto excepciones y no se haya reservado los derechos que consagra la ley.

Otro aspecto que hay que poner de relieve es que el inciso 2° del artículo 177 del Código Tributario no exige reserva alguna al ejecutado para el juicio ordinario correspondiente, ni petición, ni declaración expresa



respecto de las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, excluidas aquellas que establece el artículo 177 del Código Impositivo que pueden hacerse valer en dicho procedimiento. Por tanto, la aplicación de la reserva establecida en los artículos 473 y 474 del Código de Enjuiciamiento Civil no se aplica en materia tributaria.

Por otro lado, sería un contrasentido pensar que si el actor de autos opuso la excepción de prescripción, vaya a hacer una reserva de la misma excepción para un juicio ordinario, dado el carácter de derecho estricto que revista dicha excepción y que, en principio, no requiere prueba, salvo para justificar un hecho que interrumpa o suspenda el curso de la misma, cuestión probatoria que sería de cargo de la ejecutante y no de la ejecutada.

Undécimo: Que, además, hay que resaltar, que la doctrina emanada de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que la notificación y requerimiento de pago, efectuado en el procedimiento administrativo, si bien produce la interrupción de la prescripción, a partir de ese momento comienza a correr un nuevo término extintivo de prescripción, fundado en el hecho que no puede concebirse la acción de cobro tributario como una de carácter imprescriptible. Y esto es así, porque el derecho debe dar respuesta a las situaciones de incertidumbre jurídica, zanjando aquellas controversias que existan entre los litigantes, erigiéndose en este punto, como garantía fundamental “el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”.

De haberse probado la existencia de los expedientes administrativos que la demandada alegaba, queda de manifiesto que desde el nacimiento del primer expediente habrían transcurrido 15 años hasta a fecha de interposición de la presente demanda; respecto del segundo, 12 años; del tercero y cuarto, 10 años; del quinto, 7 años, y del último, 6 años.

Todo lo anterior pone de manifiesto que la demandada, si tramitó dichos expedientes, lo hizo de manera tan negligente, que ha conculcado la garantía procesal antes señalada.

Duodécimo: Que valga precisar que esta doctrina jurisprudencial nació, precisamente, por todas las trabas y entorpecimientos que provoca el Servicio de Tesorerías para efectos de declarar la prescripción, manteniendo la situación judicial de un contribuyente en un estado procesal



de carácter permanente. Por ello, se ha señalado que: *“la imprescriptibilidad tiene carácter excepcional, y por ello debe fundarse en norma expresa de la ley, que en la especie no ocurre puesto que no existe norma que consagre la imprescriptibilidad de la acción de cobro en materia tributaria, por lo que sería una contravención legal otorgar tratamiento de imprescriptibilidad a esta materia. Entonces, luego del acto del requerimiento judicial, comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, que es de 3 años, y que tiene la Tesorería para activar todas las diligencias tendientes a la ejecución y cobro efectivo de la deuda”*.

A su vez, en la causa rol N°4260-2019, de 12 de diciembre de 2019, aseveró que luego del requerimiento de pago comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, el que debe conservar la naturaleza. En efecto, ha expresado que *“el silencio normativo que se deriva de que el artículo 201 del Código Tributario no haya expresado que empiece a correr un nuevo plazo una vez producida la interrupción de la prescripción en virtud de un requerimiento judicial, ni haya señalado la extensión de ese nuevo plazo, de ninguna manera autoriza para sustentar la hipótesis de que, en lo sucesivo, no pueda iniciarse una nueva prescripción, pues ello equivaldría a consagrar en la situación descrita la imprescriptibilidad perpetua o permanente de la acción de cobro tributario. Es menester recordar a tal respecto que la prescripción extintiva, como institución vinculada al interés colectivo implícito en la mantención de la estabilidad y certeza en las relaciones jurídicas y de la paz social, tiene aplicación general dentro del ordenamiento. Bajo tal premisa, la imprescriptibilidad reviste carácter excepcional y debe fundarse en el texto expreso de la ley o surgir de la naturaleza de la materia a que se refiere la acción correspondiente*.

Asentado como principio que a la interrupción de la prescripción por el requerimiento judicial puede seguir una nueva prescripción, procede dilucidar en qué circunstancias y condiciones ello habrá de ocurrir.

En lo que interesa, en aquellos casos donde la interrupción ha producido el efecto que le es propio, a saber, detener el decurso de la prescripción, como ocurre en las situaciones en que sólo existe requerimiento judicial al que no sigue actividad alguna del órgano fiscal tendiente a continuar la ejecución -como se observa en la especie-, la



prescripción se inicia de nuevo desde la data del requerimiento. La nueva prescripción a iniciarse a partir del tiempo indicado necesariamente debe conservar la naturaleza y caracteres de la precedente, teniendo en consecuencia su misma duración, por lo que el plazo durante el cual habrá de extenderse no puede ser otro que el señalado en el artículo 201 del Código Tributario, en su remisión al artículo 200 del mismo Código.”

Décimo tercero: Que no habiéndose demostrado por la demandada ninguna de las hipótesis de interrupción o suspensión de la prescripción y siguiendo la doctrina asentada por el Máximo Tribunal, ha quedado de manifiesto que el plazo de prescripción comenzó a correr, como se señaló precedentemente, de manera ininterrumpida, desde el vencimiento legal de cada uno de los tributos consignados en los Formularios 21 y 29, con vencimiento la última de ellas en el 2015.

En consecuencia, el plazo de la prescripción extintiva de 3 años que reconoce el artículo 201 del Código Tributario, habrá de computarse a partir del día siguiente del vencimiento legal respectivo.

Así las cosas, dado que la demanda fue presentada el 22 de septiembre de 2022 y notificada conforme a derecho el 27 de enero de 2023, motivo por el cual, han transcurrido más de 8 años, término que supera con creces, incluso, el plazo extraordinario de seis años contenido en el artículo 200 del Código Impositivo, lo que conduce, indefectiblemente, a acoger la demanda en todas sus partes, declarándose la prescripción extintiva del cobro de las obligaciones tributarias consignadas en el Certificado de Deuda emanado de la Cuenta Única del contribuyente.

Décimo cuarto: Que habiendo resultado totalmente vencida la demandada y no pudiendo estimarse que “ha litigado” con motivo plausible, dado la falta de prueba de sus alegaciones, será condenada al pago de las costas.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además lo dispuesto en los artículos 160, 161, 170, 273, 341, 342 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1698, 2492, 2515 y demás pertinentes del Código Civil; artículos 200 y 201 del Código Tributario, se decide:

I. Que, **se acoge** la demanda deducida por don Fernando Quintanilla Letelier en representación de **SOHL Arquitectura Limitada**, en contra de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXWJXXXXQGF

Tesorería General de La República y, en consecuencia, se declara la prescripción extintiva de todas las obligaciones tributarias consignadas en el certificado de deuda del actor que fuere acompañado al proceso, y según lo establecido en motivo noveno de esta sentencia;

II. Que **se condena** en costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° C-4548-2022.

Pronunciada por don **Patricio Hernández Jara**, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXWJXXXQGF